

CONVENIO
DE
ASISTENCIA JUDICIAL
EN
MATERIA PENAL
ENTRE
EL GOBIERNO DE LA REPUBLICA ARGENTINA
Y
EL GOBIERNO DE LA REPUBLICA FRANCESA

El Gobierno de la República Argentina y el Gobierno de la República Francesa, deseosos de mejorar la eficacia de las autoridades de ambos países en la investigación y el enjuiciamiento de delitos mediante la cooperación y la asistencia judicial mutua en asuntos penales,

Acuerdan lo siguiente:

ARTICULO 1
OBLIGACIONES DE LA ASISTENCIA

1. Ambas Partes Contratantes se comprometen a brindarse mutuamente la más amplia asistencia judicial posible en todo procedimiento relativo a delitos penales cuya sanción sea, al momento de solicitarse la asistencia, de competencia de las autoridades judiciales de la Parte requirente.

2. El presente Convenio no se aplicará ni a la ejecución de órdenes de aprehensión y condenas, salvo el caso del decomiso, ni a los delitos militares que no constituyan delitos de derecho común.

ARTICULO 2 AMBITO DE APLICACION

La asistencia comprenderá, entre otros supuestos:

- a) La búsqueda de personas;
- b) La notificación de actos judiciales;
- c) La producción de documentos y actos judiciales;
- d) La ejecución de registros domiciliarios;
- e) La recepción de testimonios e interrogatorios de imputados;
- f) La citación de testigos, peritos e imputados;
- g) El traslado de personas detenidas para prestar testimonio en la Parte requirente;
- h) El embargo, secuestro y decomiso de bienes.

ARTICULO 3 AUTORIDADES CENTRALES

1 Cada una de las Partes designará una Autoridad Central encargada de presentar y recibir las solicitudes que constituyen el objeto del presente Convenio.

2 A este fin las Autoridades Centrales se comunicarán directamente entre ellas y remitirán la solicitud a sus autoridades competentes.

3 Las Autoridades Centrales serán designados al momento de la firma del presente Convenio por intercambio de notas.

ARTICULO 4
AUTORIDADES COMPETENTES

Las autoridades competentes son, en Francia, las autoridades judiciales y en la Argentina, las autoridades judiciales y el Ministerio Público Fiscal.

ARTICULO 5
SOLICITUD DE ASISTENCIA

1. La solicitud de asistencia se formulará por escrito y deberá contener los siguientes requisitos:

- a) la autoridad de la cual proviene la solicitud;
- b) el objeto y el motivo de la solicitud;
- c) cuando fuera posible la identidad y la nacionalidad de la persona imputada; y
- d) la identidad y si fuera posible, la dirección de la persona involucrada en la solicitud.

2. En el caso en el cual la solicitud no tuviese como objeto unicamente la notificación de actos o el intercambio de informaciones sobre decisiones judiciales, deberá además contener una exposición sucinta de los hechos que la motivan así como la denominación legal del delito que se investiga.

ARTICULO 6
RECHAZO DE LA ASISTENCIA

1. La asistencia podrá ser negada:

- a) Si se refiere a delitos que la Parte requerida considera políticos o como delitos de derecho común conexos a un delito político.

b) Si la solicitud tuviere por objeto medidas de embargo, secuestro o registro domiciliario y los hechos que motivan el requerimiento no fuesen considerados como delito conforme a la legislación de la Parte requerida.

c) Si la Parte requerida considerare que la prestación de la asistencia pudiere causar perjuicio a su soberanía, a su seguridad, al orden público u otros intereses esenciales de la Nación.

2. La asistencia será rechazada cuando la solicitud tuviere por objeto una medida de decomiso y los hechos que motivan la demanda no constituyeren un delito para la legislación del país requerido.

3. La Parte requerida deberá, sin demora, comunicar a la Parte requirente la eventual decisión de no cumplir en todo o en parte el pedido de asistencia, con indicación de los motivos.

ARTICULO 7

FORMA DE LA TRAMITACION

1. Las solicitudes de asistencia serán tramitadas en la forma prevista por la legislación de la Parte requerida.

2. Si la Parte requirente solicitase una forma especial de tramitación, la Parte requerida deberá observar las modalidades indicadas, siempre que ello no contraríe su propia legislación.

ARTICULO 8

REMISION DE DOCUMENTOS Y OBJETOS

1. Si la solicitud de asistencia tuviere por objeto la remisión de documentos y expedientes, la Parte requerida tendrá la facultad de entregarlos en copia o fotocopia certificada, salvo que la Parte requirente solicitare expresamente los originales.

2. La Parte requerida podrá negarse al envío de documentos y objetos que le hubiesen sido solicitados, si su legislación no lo permitiere o diferir estos documentos u objetos si le fueren necesarios en un procedimiento penal en curso.

3. Los documentos originales y los objetos que hubieren sido enviados en cumplimiento de un pedido de asistencia, deberán ser devueltos lo antes posible por la Parte requirente, a menos que la Parte requerida manifestare su desinterés por la devolución.

ARTICULO 9 RESTITUCION

La Parte requirente podrá solicitar a la Parte requerida que restituya al damnificado, respetando los derechos de terceros, todos los bienes o valores que pudieren provenir de un delito.

ARTICULO 10 PRODUCTO DE DELITOS

1. La Parte requirente podrá solicitar que se busquen y embarguen los productos de una violación a su legislación penal, que pudiere encontrarse en el territorio de la Parte requerida.

2. La Parte requerida comunicará a la Parte requirente, el resultado de sus investigaciones.

3. La Parte requerida adoptará todas las medidas necesarias que le autorice su legislación para impedir que esos productos sean objeto de una transacción o sean transferidos o cedidos antes de que la autoridad competente de la Parte requirente haya tomado una decisión definitiva.

4. Si el decomiso de productos fuere solicitado, la petición se ejecutará de acuerdo a la legislación de la Parte requerida.

5. Los productos decomisados quedarán en propiedad de la Parte requerida, salvo acuerdo en contrario.

ARTICULO 11 ENTREGA DE ACTOS PROCESALES

La Parte requerida transmitirá a la Parte requirente, la prueba de la entrega de los documentos, mencionando la entrega, su forma y su fecha, eventualmente por medio de un recibo fechado y firmado por el destinatario. Si la entrega no pudiera efectuarse, la Parte requirente será notificada sin demora e informada de las razones que imposibilitan su cumplimiento.

ARTICULO 12 COMPARENCIA DE PERSONAS ANTE LA PARTE REQUIRENTE

1. La solicitud que tenga por objeto la citación de un imputado, testigo o perito ante las autoridades competentes, deberá ser transmitida a la Autoridad Central de la Parte requerida con no menos de cuarenta y cinco (45) días de anticipación a la fecha del comparendo. En caso de urgencia la Autoridad Central de la Parte requerida podrá renunciar a este plazo, a solicitud de la Autoridad Central de la Parte requirente.

2. La Parte requerida procederá a la citación según la solicitud formulada, pero sin que puedan surtir efectos las cláusulas conminatorias o sanciones previstas para el caso de incomparencia.

3. Al testigo y al perito les corresponderá el reembolso de los gastos y las indemnizaciones previstas en la legislación de la Parte requirente. La solicitud deberá especificar sus importes.

ARTICULO 13

FECHA Y LUGAR DEL DILIGENCIAMIENTO

1. Si la Parte requirente lo solicitase expresamente, la Parte requerida le informará la fecha y el lugar del diligenciamiento de la rogatoria.
2. Las autoridades y las personas acreditadas por ellas, podrán asistir al diligenciamiento de la rogatoria si así lo consintiese la Parte requerida en el caso de Francia o la autoridad competente en lo que concierne a la Argentina.

ARTICULO 14

DECLARACION DE PERSONAS EN EL TERRITORIO DE LA PARTE REQUERIDA

Si la solicitud tuviese por objeto la declaración de un imputado, testigo o perito en el territorio de la Parte requerida, ésta procederá a la citación bajo las formas previstas en su legislación.

ARTICULO 15

IMPUNIDAD

1. El imputado, testigo o perito que como consecuencia de una citación compareciere ante la autoridad competente de la Parte requirente, no podrá ser perseguido o detenido por hechos o condenas anteriores a su salida del territorio de la Parte requerida.
2. La inmunidad prevista en el presente artículo cesará tener efecto cuando la persona que compareciere ante la autoridad competente no hubiere abandonado el territorio de la Parte requirente, habiendo tenido la posibilidad de hacerlo, en un plazo de quince (15) días desde la que le hubiera sido notificada por las autoridades competentes que su presencia no es más necesaria o, habiéndolo abandonado, regresare al mismo.

ARTICULO 16
TRASLADO DEL DETENIDO

1. Cuando la citación para declarar o para un careo ante las autoridades competentes de la Parte requirente se refiera a una persona detenida en el territorio de la Parte requerida, ésta sólo accederá a ella si el detenido prestare su consentimiento.

2. La Parte requirente estará obligada a mantener bajo custodia a la persona trasladada y devolverla en las mismas condiciones tan pronto como hubiere cesado la necesidad que motivó la solicitud que diera lugar al traslado, a menos que la Parte requerida solicitare expresamente que fuera puesta en libertad.

ARTICULO 17
RECHAZO DEL TRASLADO

El traslado puede ser rechazado:

- a) si la presencia de la persona es necesaria durante un procedimiento penal en curso en el territorio de la Parte requerida;
- b) si su traslado fuere susceptible de prolongar su detención; o
- c) si otras consideraciones de importancia se opusieran a su traslado al territorio de la Parte requirente.

ARTICULO 18
TRANSITO

1. Una Parte podrá autorizar el tránsito en su territorio de personas detenidas por un tercer Estado cuya comparecencia personal a los fines de prestar declaración o un careo haya sido solicitada por la otra Parte. Esta autorización será otorgada ante un pedido acompañado de todos los documentos necesarios.

2. La persona trasladada deberá quedar detenida en el territorio de la Parte requirente y eventualmente en el territorio de la Parte a la cual el tránsito ha sido solicitado, a menos que la Parte requerida pida su liberación durante la remisión temporaria.
3. Cada Parte podrá negarse a conceder el tránsito de sus nacionales.

ARTICULO 19

DENUNCIA PARA LA PROSECUCION DE ACCIONES PENALES PUBLICAS

1. Toda denuncia dirigida por una Parte Contratante en vista de la prosecución de acciones penales públicas ante las autoridades competentes de la otra Parte, será objeto de comunicaciones entre las Autoridades Centrales.
2. La Parte requerida hará saber el curso dado a esta denuncia y transmitirá, si procediere, copia de la decisión tomada.

ARTICULO 20

GASTOS

1. A reserva de las disposiciones del artículo 12, párrafo 3, la ejecución de la solicitud de asistencia, no dará lugar a reembolso alguno de gastos, a excepción de los ocasionados con la intervención de peritos en el territorio de la Parte requerida y por el traslado o tránsito de las personas detenidas que hubiere efectuado por aplicación de los artículos 16 y 18.
2. Si la ejecución de la solicitud requiriere gastos extraordinarios, las Autoridades Centrales se consultarán para determinar los términos y condiciones bajo las cuales se cumplirá la asistencia requerida.

ARTICULO 21

IDIOMA

La solicitud y los documentos anexos, cuyo envío se encuentra previsto en el presente Convenio, deberán ser acompañados por una traducción en el idioma de la Parte requerida.

ARTICULO 22

COMUNICACION DE CONDENAS

Ambas Autoridades Centrales se informarán anualmente las comunicaciones de sentencias condenatorias de sus nacionales y a pedido de una de las Partes, los fundamentos de la sentencia condenatoria.

ARTICULO 23

ANTECEDENTES PENALES

Las Autoridades Centrales se comunicarán, mediando expreso pedido, los antecedentes penales de una persona, según lo permita su legislación.

ARTICULO 24

EXENCION DE LEGALIZACIONES

Los documentos previstos en el presente Convenio, estarán exentos de toda legalización o de toda otra formalidad análoga.

ARTICULO 25

CONSULTAS

Ambas Partes se consultarán por la vía diplomática, a petición de cualquiera de ellas, sobre la interpretación y la aplicación del presente Convenio.

ARTICULO 26
ENTRADA EN VIGOR Y DENUNCIA

1. Cada una de las Partes notificará a la otra el cumplimiento de los procedimientos constitucionales requeridos para la entrada en vigor del presente Convenio, que tendrá lugar el primer día del segundo mes siguiente al día de la recepción de la última notificación.

2. Cualesquiera de las Partes podrá denunciar en todo momento el presente Convenio mediante una notificación escrita dirigida a la otra Parte por la vía diplomática; en este caso, la denuncia tendrá efecto el primer día del tercer mes siguiente al día de la recepción de dicha notificación.

En fe de lo cual, los representantes de los dos Gobiernos, debidamente autorizados, han firmado el presente Convenio.

Hecho en París, el 14 de octubre de 1998, en dos originales en idiomas español y francés, siendo ambos igualmente auténticos.

Por el Gobierno de la
República Argentina

Por el Gobierno de la
República Francesa

CONVENTION D'ENTRAIDE JUDICIAIRE

EN MATIERE PENALE

ENTRE

LE GOUVERNEMENT DE

LA REPUBLIQUE ARGENTINE

ET

LE GOUVERNEMENT DE

LA REPUBLIQUE FRANCAISE

Le Gouvernement de la République argentine

et

Le Gouvernement de la République française,

désireux d'améliorer l'efficacité des autorités des deux pays dans l'instruction et le jugement des infractions grâce à la coopération et l'entraide en matière pénale,

sont convenus de ce qui suit :

ARTICLE 1er

Obligation d'entraide

1. Les deux Parties s'engagent à s'accorder mutuellement l'aide judiciaire la plus large possible dans toute procédure visant des infractions pénales dont la répression est, au moment où l'entraide est demandée, de la compétence des autorités judiciaires de la Partie requérante.

2. La présente Convention ne s'applique ni à l'exécution des décisions d'arrestation et de condamnation, sauf en cas de confiscation, ni aux infractions militaires qui ne constituent pas des infractions de droit commun.

ARTICLE 2

Champ d'application

L'entraide inclut notamment:

- a) la recherche de personnes,
- b) la notification de décisions judiciaires,
- c) la production de documents et de décisions judiciaires,
- d) l'exécution de perquisitions,
- e) le recueil des dépositions et l'interrogatoire des personnes en cause,
- f) la citation de témoins, d'experts et de personnes poursuivies,
- g) le transfert des personnes détenues afin qu'elles puissent témoigner sur le territoire de la partie requérante,
- h) la saisie, la mise sous séquestre et la confiscation de biens.

ARTICLE 3

Autorités centrales

1. Chacune des Parties désigne une autorité centrale chargée de présenter et de recevoir les demandes qui font l'objet de la présente Convention.

2. A cette fin, les autorités centrales communiqueront directement entre elles et remettront la demande à leurs autorités compétentes.

3. Les autorités centrales seront désignées au moment de la signature de la présente Convention, par simple échange de lettres.

ARTICLE 4

Autorités compétentes

Les autorités compétentes sont : en Argentine, les autorités judiciaires y compris le ministère public ; en France, les autorités judiciaires.

ARTICLE 5

Demande d'entraide

1. La demande d'entraide est présentée par écrit et comprend les éléments suivants :

- a) l'autorité dont émane la demande,
- b) l'objet et le motif de la demande,
- c) lorsque cela est possible, l'identité et la nationalité de la personne en cause, et
- d) l'identité et, si possible, l'adresse du destinataire concerné par la demande.

2. Dans le cas où la demande n'a pas uniquement pour objet la notification d'actes ou l'échange d'informations sur des décisions judiciaires, elle devra comporter un exposé succinct des faits qui la motivent ainsi que la qualification pénale de ceux-ci.

ARTICLE 6

Rejet de l'entraide

- 1. L'entraide peut être refusée :
 - a) si elle se réfère à des infractions considérées par la Partie requise comme politiques ou comme des infractions de droit commun connexes à une infraction politique;

b) si la demande a pour objet une perquisition, une saisie, une mise sous séquestre et que les faits à l'origine de la requête ne constituent pas une infraction au sens de la législation de la Partie requise;

c) si la Partie requise estime que l'exécution de la demande d'entraide peut porter atteinte à sa souveraineté, à sa sécurité, à l'ordre public ou à d'autres intérêts essentiels de son pays.

2. L'entraide est refusée si la demande a pour objet une mesure de confiscation et que les faits à l'origine de la requête ne constituent pas une infraction au sens de la législation de la Partie requise.

3. La Partie requise doit faire part sans délai à la Partie requérante de son éventuelle décision de ne pas exécuter la demande d'entraide en totalité ou en partie, en en précisant les raisons.

ARTICLE 7

Exécution de la demande

1 - Les demandes d'entraide sont exécutées dans les conditions prévues par la législation de la Partie requise.

2 - Toutefois lorsque la Partie requérante demande une forme particulière d'exécution, la Partie requise doit observer les modalités indiquées, à condition qu'elles ne soient pas contraires à sa propre législation.

ARTICLE 8

Remise de documents et d'objets.

1. Lorsque la demande d'entraide a pour objet la remise de documents ou de dossiers, la Partie requise a la possibilité de les adresser sous forme de copie ou de photocopie certifiées conformes, sauf si la Partie requérante demande expressément les originaux.

2. La Partie requise peut refuser l'envoi de documents ou d'objets qui lui ont été demandés, si sa législation ne lui permet pas d'y procéder, ou surseoir à cet envoi, si ces objets lui sont nécessaires pour une procédure pénale en cours.

3. Les documents originaux et les objets qui ont été transmis en exécution d'une demande d'entraide, doivent être renvoyés le plus rapidement possible par la Partie requérante, à moins que la Partie requise n'y renonce.

ARTICLE 9

Restitution

La Partie requérante peut demander à la Partie requise de restituer à la victime, dans le respect des droits des tiers, tous biens ou valeurs susceptibles de provenir d'une infraction.

ARTICLE 10

Produit des infractions

1. La Partie requérante peut demander de rechercher et de saisir les produits d'une infraction à sa législation susceptibles de se trouver sur le territoire de la Partie requise.

2. La Partie requise informe la partie requérante du résultat de ses recherches.

3. La Partie requise prend toutes dispositions nécessaires autorisées par sa législation pour empêcher que ces produits ne fassent l'objet d'une transaction ou ne soient transférés ou cédés avant que l'autorité compétente de la Partie requérante n'ait pris une décision définitive à leur égard.

4. Si la confiscation des produits est sollicitée, la demande est exécutée conformément à la législation de la Partie requise.

5. Les produits confisqués restent la propriété de la Partie requise sauf accord contraire.

ARTICLE 11

Remise des actes de procédure

La Partie requise transmet à la Partie requérante la preuve de la remise des documents, mentionnant cette remise, sa forme et sa date, éventuellement au moyen d'un récépissé daté et signé par le destinataire. Si la remise ne peut être effectuée, la Partie requérante en sera avisée sans délai et sera informée des raisons qui l'ont empêchée.

ARTICLE 12

Comparution de personnes devant la Partie requérante

1. La demande de comparution d'une personne poursuivie, d'un témoin ou d'un expert devant les autorités compétentes est adressée à l'autorité centrale de la Partie requise au moins 45 (quarante cinq) jours avant la date fixée pour

comparaître. En cas d'urgence, l'autorité centrale de la Partie requise peut renoncer à cette condition de délai, à la demande de l'autorité centrale de la Partie requérante.

2. La Partie requise procède à la citation selon la demande formulée, mais sans que puissent être appliquées les mesures de contrainte ou les sanctions prévues en cas de non comparution.

3. Les indemnités à verser et les frais à rembourser au témoin et à l'expert sont calculés selon la législation de la Partie requérante. La demande doit préciser leurs montants.

ARTICLE 13

Date et lieu de l'exécution de la commission rogatoire

1. Si la Partie requérante le demande expressément, la Partie requise l'informe de la date et du lieu de l'exécution de la commission rogatoire.

2. Les autorités compétentes et les personnes mandatées par elles peuvent assister à cette exécution, si y consent l'autorité compétente en ce qui concerne l'Argentine, la Partie requise en ce qui concerne la France.

ARTICLE 14

Audition de personnes sur le territoire de la Partie requise

Lorsque la demande a pour objet l'interrogatoire d'une personne poursuivie ou l'audition d'un témoin ou d'un expert sur le territoire de la Partie requise, celle-ci procède à sa citation selon les dispositions de sa législation.

ARTICLE 15

Immunité

1. La personne poursuivie, le témoin ou l'expert qui, à la suite d'une citation, comparaît devant l'autorité compétente de la Partie requérante, ne peut être poursuivi ou détenu pour des faits ou des condamnations antérieurs à sa sortie du territoire de la Partie requise.

2. L'immunité prévue au présent article cesse de produire ses effets lorsque la personne qui comparaît en justice, ayant eu la possibilité de quitter le territoire de la Partie requérante, dans un délai de 15 (quinze jours) après que sa présence n'était plus requise par les autorités compétentes, est demeurée sur ce territoire ou y est retournée après l'avoir quitté.

ARTICLE 16

Transfèrement d'un détenu.

1. Lorsque la citation pour audition ou la confrontation devant les autorités compétentes de la Partie requérante concerne une personne détenue sur le territoire de la Partie requise, celle-ci peut ne pas accéder à la demande si le détenu n'y consent pas.

2. La Partie requérante est dans l'obligation de maintenir en détention la personne transférée et de la renvoyer dans les mêmes conditions dès que les raisons qui avaient motivé son transfèrement disparaissent, à moins que la Partie requise ne demande expressément sa mise en liberté.

ARTICLE 17

Conditions de refus

Le transfèrement peut être refusé :

- a) si la présence de la personne est nécessaire dans une procédure pénale en cours sur le territoire de la Partie requise ;
- b) si son transfèrement est susceptible de prolonger sa détention ; ou
- c) si d'autres considérations impérieuses s'opposent à son transfèrement sur le territoire de la Partie requérante.

ARTICLE 18

Transit

1. Une Partie peut autoriser le transit sur son territoire de personnes détenues par un Etat tiers dont la comparution personnelle aux fins d'audition ou de confrontation a été sollicitée par l'autre Partie. Cette autorisation est accordée sur demande accompagnée de tous documents utiles.

2. La personne transférée doit rester en détention sur le territoire de la Partie requérante et, le cas échéant, sur le territoire de la Partie à laquelle le transit est demandé, à moins que la Partie requise ne demande sa mise en liberté pendant la remise temporaire.

3. Chaque Partie peut refuser d'accorder le transit de ses ressortissants.

ARTICLE 19

Dénonciations aux fins de poursuites pénales

1. Toute dénonciation adressée par une Partie contractante en vue de poursuites pénales devant les autorités compétentes de l'autre Partie fera l'objet d'une communication entre autorités centrales.

2. La Partie requise fera connaître la suite donnée à cette dénonciation et transmettra s'il y a lieu copie de la décision intervenue.

ARTICLE 20

Frais

1. Sous réserve des dispositions de l'article 12, paragraphe 3, l'exécution des demandes d'entraide ne donne lieu au remboursement d'aucun frais, à l'exception de ceux occasionnés par l'intervention d'experts sur le territoire de la Partie requise et par le transfèrement ou le transit de personnes détenues effectué en application des articles 16 et 18.

2. Si l'exécution de la demande implique des frais extraordinaires, les autorités centrales se consulteront afin de fixer les conditions dans lesquelles l'assistance requise sera accordée.

ARTICLE 21

Langue

La demande et les documents qui y sont annexés doivent être accompagnés d'une traduction dans la langue de la Partie requise.

ARTICLE 22

Communication de condamnations

L'autorité centrale d'une Partie communique annuellement à l'autorité centrale de l'autre Partie les avis de condamnation prononcée par ses autorités compétentes à l'encontre de ressortissants de l'autre Partie et, sur demande, les décisions de condamnation.

ARTICLE 23

Casier judiciaire

Chaque autorité centrale communique à l'autre autorité centrale, sur sa demande, le casier judiciaire d'une personne dans la mesure où sa propre législation le lui permet.

ARTICLE 24

Dispense de légalisation

Les documents prévus par la présente Convention sont dispensés de toute légalisation et de toute autre formalité analogue.

ARTICLE 25

Consultations

Les deux Parties se consultent, à la demande de l'une d'entre elles, par la voie diplomatique, sur l'interprétation et l'application de la présente Convention.

ARTICLE 26

Entrée en vigueur et dénonciation

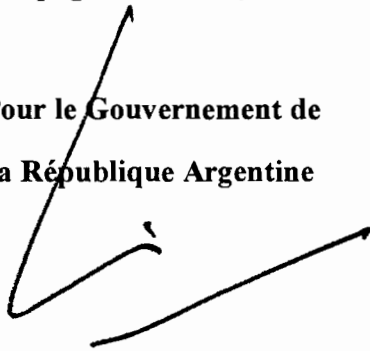
1. Chacune des deux Parties notifiera à l'autre l'accomplissement des procédures constitutionnelles requises pour l'entrée en vigueur de la présente Convention, qui aura lieu le premier jour du deuxième mois suivant le jour de la réception de la dernière notification.

2. L'une ou l'autre des deux Parties pourra dénoncer à tout moment la présente Convention, par une notification écrite adressée à l'autre Partie par la voie diplomatique ; dans ce cas, la dénonciation prendra effet le premier jour du troisième mois suivant le jour de la réception de ladite notification.

**En foi de quoi, les représentants des deux Gouvernements,
dûment autorisés, ont signé la présente Convention.**

Fait à Paris le 14 octobre 1998 en double exemplaire, en
langues espagnole et française, les deux textes faisant également foi.

**Pour le Gouvernement de
la République Argentine**



**Pour le Gouvernement de
la République Française**

